

Título de la ponencia:

DESAFÍOS DEL VOTO ELECTRÓNICO RESPECTO AL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS COMICIOS.

Challenges of electronic voting regarding the control and supervision of elections.

Lic. Javier Mojarro Rosas

Director Jurídico

Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes

javomojarro@gmail.com

Sumario: *I. Introducción. II. La confianza a través del control y la fiscalización de los comicios. III. El derecho a la salud frente a la transparencia electoral. IV. Desafíos del voto electrónico como solución a la contingencia sanitaria. V. Conclusiones. Fuentes Consultadas.*

Resumen. *A partir de la aparición de la contingencia sanitaria a nivel mundial, se ha comenzado a analizar sobre el nuevo esquema que debe implementarse para el desarrollo de los procesos electorales en los Estados, donde se prioricen procedimientos que eviten el contacto físico tanto de las personas involucradas en la organización de los comicios como de la ciudadanía votante en general. La respuesta se ha encaminado nuevamente al análisis y discusión de la pertinencia de incorporar tecnologías como herramientas que facilitarían la celebración de elecciones ponderando la salud de la población; sin embargo, el control y la fiscalización de los comicios a cargo principalmente de los partidos políticos y las candidaturas contendientes estaría en riesgo de ser efectuado a plenitud ante la falta de pericia y conocimiento informático y computacional necesario para su realización. Lo anterior nos lleva a la reflexión y el cuestionamiento no solo de la pertinencia, sino también de hasta qué punto el derecho a la salud de los individuos debe estar por encima del de vigilar y observar que los procesos electorales se lleven conforme a derecho y en respeto a los principios que los rigen, tales como la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, exhaustividad y máxima publicidad.*

Palabras clave: *Contingencia sanitaria, control de las elecciones, tecnologías, derecho a la salud.*

I. Introducción

En medio de la contingencia sanitaria que estamos viviendo provocada por la expansión en todo el mundo del virus denominado Coronavirus (COVID-19), lo que llevó a la Organización Mundial

de la Salud¹ a declarar la existencia de una pandemia, la materia electoral no escapó de sus consecuencias, en México por señalar un ejemplo, durante este año fueron suspendidos dos procesos electorales locales en los estados de Coahuila e Hidalgo; virtud de lo anterior, lo más lógico sería pensar en traer nuevamente a la mesa del debate el uso de tecnologías para el ejercicio democrático del sufragio en aras de afrontar la nueva normalidad, sin embargo, las tecnologías no siempre resultan las soluciones más adecuadas para todo tipo de conflictos, en este caso, antes de tomar cualquier decisión es importante analizar los principales desafíos y problemas que debe enfrentar el voto electrónico u otras herramientas tecnológicas en el desarrollo de los procesos electorales en cuanto a su implementación, pero sobre todo respecto al enfoque del control y fiscalización de los comicios.

La presente ponencia desarrollará en primer término, la importancia de los elementos del control electoral como vía para lograr el desarrollo de procesos electorales con integridad, con el objetivo de resaltar la relevancia que tienen en cualquier sistema que se ostente como democrático; con posterioridad señalaré las normas aplicables en materia de salud ante la determinación de la pandemia, en el contexto mexicano, que obligan al Estado a implementar medidas especiales en todos los rubros de convivencia social, incluida la materia político-electoral, con la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud poblacional; la disyuntiva generada me permitirá exponer el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de los procesos electorales como una solución para enfrentar los retos ocasionados por la contingencia sanitaria, señalando también los desafíos que esta implementación implica en cuanto a los elementos de control de las elecciones; de esta manera concluiré haciendo una ponderación, respondiendo si el derecho a la salud debe prevalecer por encima del derecho con el que cuenta también la ciudadanía para observar y fiscalizar el ejercicio democrático, o si es posible hacerlos convivir, sin que se vea menoscabado alguno de estos, y sobre todo sin que se pierda la confianza de la propia ciudadanía en las elecciones, como su legitimidad por parte de las élites y los actores involucrados.

¹ En adelante OMS.

II. La confianza a través del control y la fiscalización de los comicios.

La construcción de la confianza en las elecciones nace principalmente del involucramiento de todos los actores interesados, partidos políticos, candidaturas, autoridades, funcionarios y funcionarias electorales y la ciudadanía en general, ya sea organizada o no, e incluso de las organizaciones internacionales no gubernamentales mediante la observación electoral, en cada una de las etapas que componen los procesos electorales. Lo anterior es así, ya que, mediante diversos elementos de control y fiscalización llevados por cada una de las partes descritas, se puede evitar la comisión de errores sistémicos, o de acciones premeditadas de manipulación y fraude electoral, es decir, en la medida en que los comicios sean constantemente vigilados por todas las partes involucradas en los mismos, cada una en el ejercicio de las atribuciones que la norma les otorga para ello, es más probable que las elecciones se efectúen con integridad, profesionalismo y respetando los procedimientos que marca la ley, en respeto a los principios rectores de la materia.

La integridad en las elecciones ha sido definida por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA por sus siglas en inglés) como el compromiso que asumen y observan de manera genuina las y los integrantes del organismo encargado de organizarlas, de actuar en el ejercicio de sus funciones con ética y sujetos a los mandatos constitucionales y legales (IDEA, 2006:8). Por su parte Goncalves ha señalado que para considerar una elección como libre, implica que los gobiernos sean electos en un ambiente donde todas las personas puedan expresar su voluntad política sin restricciones, a saber, donde se respeten los principios de universalidad, igualdad y secrecía del voto (Goncalves, 2013:56). Por lo anterior, podemos concluir que una elección íntegra y libre, es el resultado en una gran parte, de la correcta implementación de mecanismos de control y fiscalización, la que el consejero Murayama define como “el ejercicio de todos aquellos medios de vigilancia y control electorales realizados por parte de las autoridades administrativas o judiciales, organismos nacionales e internacionales, así como de organizaciones civiles, medios de comunicación y la ciudadanía, con el objeto de asegurar que los comicios se lleven a cabo conforme la legislación electoral y reproduzcan la expresión libre y auténtica del electorado” (Murayama, 2017:423).

Del esquema de control y fiscalización señalado con anterioridad se desprende que el elemento principal con el que cuentan los actores involucrados en la vigilancia de los comicios, en particular

los partidos políticos y las candidaturas, es su propio conocimiento en la materia y su capacidad de observación, de ahí la importancia, por ejemplo, de que estos puedan acreditar representantes en las casillas electorales durante la jornada de votación, así como en los diversos cómputos de los resultados, determinando que su presencia física en estas etapas es primordial e indispensable.

Lo anterior se vuelve un elemento indispensable, ya que la estabilidad de un sistema democrático depende en gran medida de su aceptación por parte de la ciudadanía y los actores políticos que compiten dentro de este para ser electos a los cargos públicos, ya que, la confianza hacia los procesos electorales es una condición necesaria para que exista confianza en otras instituciones de la democracia. Si la ciudadanía no confía en las elecciones al considerar que las mismas no son limpias, en consecuencia, la participación electoral disminuirá y sin esta el gobierno elegido no sería legítimo ni podría ser considerado como democrático.

III. El derecho a la salud frente a la transparencia electoral.

Ahora, ¿qué pasaría si por razones de fuerza mayor, los países se vieran en la necesidad de privar a los partidos políticos y a las y los ciudadanos en general de su herramienta más importante para fiscalizar, a saber, la observación presencial y la aplicación de sus conocimientos?

En México, con la declaración de la existencia de la pandemia por parte de la OMS hecha el pasado once de marzo de dos mil veinte², fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en ese país, como una enfermedad grave de atención prioritaria, estableciendo las actividades de preparación para darle respuesta, y exhortando a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad SARS-CoV2 (Covid-19), que necesiten hospitalización.

² Según la OMS, la pandemia es definida como la propagación mundial de una enfermedad.

Posteriormente, una vez declarada la fase 2 de la epidemia en el país, se publicó en el referido medio oficial de comunicación, otro acuerdo emitido por el Secretario de Salud en el que se establecieron las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de riesgos a la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el cual se estableció -específicamente en su artículo primero- que las autoridades civiles, militares y los particulares, así como los tres órdenes de gobierno están obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus mencionado, entendiendo como tales aquellas que tengan como objeto el **distanciamiento social** para la mitigación de la transmisión poblacional del virus, disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en los grupos vulnerables. Además, entre otras cosas, el acuerdo refería que se deberá evitar la asistencia a los centros de trabajo a personas en condiciones vulnerables y **suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas.**

Finalmente, con la determinación de la fase 3 de la epidemia en el país, en fecha treinta y uno de marzo del dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo emitido por el Secretario de Salud con el cual se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, tales como que los sectores público, social y privado deberán implementar, entre otras medidas, la suspensión inmediata de las **actividades no esenciales**, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2, y de esa forma disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por esta enfermedad de la población residente en el territorio nacional, determinando que las actividades electorales no constituirían una actividad esencial, y por ende, procediendo a suspender dos elecciones locales en los estados de Hidalgo y Coahuila.

Este trágico panorama se ha prolongado hasta la actualidad en casi todas partes del mundo, lo que ha generado la creencia de que algunas actividades nunca volverán a llevarse a cabo de la misma manera como se desarrollaban antes, sobre todo aquellas que implican la conglomeración de personas. Al ser estas restricciones de carácter obligatorio en el país, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga esas atribuciones al ejecutivo federal, para el caso de este

tipo de emergencias sanitarias³, es claro que las autoridades electorales tendrán que pensar en un mecanismo diferente para desarrollar las elecciones salvaguardando el derecho a la salud de todos y todas las habitantes de este país, ya que los procesos electorales son por su naturaleza, eventos que buscan la movilización de las personas, apelando a su participación cívico-electoral, lo que inevitablemente puede traducirse en la concentración física de muchas de estas al mismo tiempo en espacios reducidos, como son las casillas electorales; lo que, aunado al número, importante también, de personas encargadas de alguna función vinculada con la organización de la elección, suman una cantidad que por mucho supera los límites establecidos por las autoridades de salud en el contexto de una contingencia sanitaria como la que vivimos.

Esta situación de emergencia ha generado una colisión entre derechos de magnitudes esenciales, tal como lo son la salud de la población frente al ejercicio de los derechos civiles y políticos, sin que resulte sencillo para las autoridades, obligadas además a salvaguardar los derechos humanos de las personas, el tomar una decisión que permita por un lado proteger a la comunidad de enfermedades y riesgos en su salud y la vida de sus integrantes, sin descuidar los procesos de transición de los cargos públicos, toda vez que, de lo contrario, podría provocarse ingobernabilidad y crisis en la toma de decisiones públicas y en la implementación de políticas que permitan el correcto desarrollo integral de la sociedad. Lo anterior ha creado un círculo causal con dirección en ambos sentidos, en el cual se ocasionan y se exigen mutuamente un derecho a otro, es decir, por un lado impera la necesidad de la protección de la salud comunitaria para estar en aptitud de optimizar los derechos políticos-electorales, pero por la otra dirección, es indispensable también la garantía del ejercicio de estos derechos políticos para permitir que el Estado funcione y pueda poner en práctica su finalidad que es gobernar y tomar decisiones en favor del desarrollo social, incluidas las políticas de salud poblacional.

Las soluciones no son claras, pero se ha vuelto a poner en el debate público, el hacer uso de las tecnologías informáticas, de comunicación e información como un remedio para hacer convivir estos derechos, lo que en esencia parece lógico y razonable, sin embargo, es importante detenerse a analizar si efectivamente el voto electrónico, como principal herramienta impulsada por el avance tecnológico para las elecciones, disminuiría los riesgos de salud producto de la contingencia

³ Artículo 73, fracción XVI, bases 1a, 2a y 3a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

sanitaria que vivimos, y sobre todo si esta modalidad permite que el ejercicio cívico-electoral se desenvuelva sin atentar los principios rectores que rigen los comicios así como los atributos del sufragio, los cuales representan las condiciones necesarias para validar, mediante confianza y legitimidad, el acto democrático.

IV. Desafíos del voto electrónico como solución a la contingencia sanitaria.

El discurso de recurrir al uso de tecnología, implementada en el desarrollo y organización de los comicios, ha tomado fuerza argumentando también la posibilidad de que la misma sociedad se vuelva renuente a participar en la integración de las mesas directivas de casilla por el temor que ha causado la aparición de la enfermedad mortal y su alta tasa de contagio; por ello el voto electrónico, en sus etapas de recepción de la votación, escrutinio y remisión de los resultados, ha sido puesto en la mira nuevamente en muchos lugares, afrontando los retos y desafíos que implicaría su implementación, en relación principalmente con la función de control y fiscalización de las elecciones, y la construcción de confianza y legitimidad que se obtiene como resultado de esta.

Al respecto, la doctora Tula señala que por voto electrónico debe entenderse como aquel en el que se sufraga mediante dispositivos electrónicos, como puede ser desde una computadora hasta cualquier máquina diseñada y programada para tal efecto (Tula; 2013), resaltando la importancia del vínculo entre la voluntad del electorado y el uso de las tecnologías, el cual debe siempre prevalecer y ser protegido como parte fundamental de la implementación tecnológica.

El voto electrónico otorgaría sin duda la ventaja de salvaguardar el derecho a la salud, reduciendo las posibilidades de conjuntar grandes números de personas al mismo tiempo en espacios reducidos, ya que, en primer lugar se disminuiría el número de ciudadanos y ciudadanas necesarios para operar las casillas de votación; actualmente en México se integran las mesas con un total de cuatro personas, una presidencia, una secretaría y dos vocalías, más tres suplencias⁴, a quienes debe sumárseles las y los capacitadores asistentes electorales y supervisores del Instituto Nacional Electoral encargados de dar soporte y coadyuvar en el correcto desarrollo de la jornada electoral con las y los funcionarios de casilla señalados; lo anterior además de la presencia de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes en cada casilla encargados

⁴ Artículo 82 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

de la vigilancia de la elección; por lo que con la implementación del voto electrónico, es probable que el número de funcionarios y funcionarias se reduzca ante la sistematización de los procedimientos de recepción del voto; en segundo término pudieran instalarse más casillas, sabiendo que se requeriría menos personal para operarlas, con lo que se lograría menos acumulación de personas en las mismas; otra opción sería incluso alargar la jornada electoral, para buscar espaciar el tiempo entre las y los votantes, evitando nuevamente la conglomeración de personas al mismo tiempo, con la ventaja de que el procedimiento del escrutinio al cierre de la casilla realizado a través de un programa informático sería más rápido que el que se lleva a cabo manualmente por la ciudadanía autorizada, de ahí que se pueda disponer más tiempo para la jornada de votación; evidentemente los mecanismos de fiscalización también cambiarían, pues de nada serviría continuar con el procedimiento en el cual la presencia física de las representaciones de los partidos políticos en cada casilla es primordial, pues con la implementación de los sistemas y programas informáticos, es lógico que ya no sería útil la simple observación, a menos que las personas que ostenten estas funciones cuenten con un conocimiento técnico especializado en esa materia, de tal forma que pudieran usarlo para vigilar que las máquinas de votación estén funcionando correctamente y no sean alteradas, atacadas o que dé inicio posean algún tipo de sesgo que beneficie o perjudique a una opción política en particular, atentando contra los principios de equidad en la contienda, de imparcialidad e independencia.

Incluso el voto electrónico puede evolucionar al grado tal en el que la ciudadanía vote desde sus hogares a través del internet usado en algún dispositivo de su pertenencia, como un teléfono celular o una computadora portátil, con lo que se evitaría por completo la movilización de las personas para ejercer su derecho al voto activo, sin embargo, este método afectaría aún más los elementos de control y fiscalización de la elección, pues aquí no existiría la presencia de ningún fiscal al momento de la votación, por lo que se pondría en duda, primeramente, la capacidad con que cuenta el programa para evitar la doble votación, o la violación del atributo personal del sufragio, al no poder controlar que una persona vote por otra, ya sea voluntariamente o no; a esta modalidad de votación se le conoce como *e-voting*, la cual considero que si bien cesaría cualquier riesgo de contagio en el contexto de una contingencia sanitaria, se encuentra aún más lejana su aplicación por las cuestiones señaladas en cuanto a su confianza y seguridad.

El principal reto de la implementación de esta tecnología en las elecciones es que con la misma se continúen respetando los atributos del voto:

- a) **Universalidad.** Es decir, romper la brecha tecnológica, mediante capacitación a la ciudadanía en el uso de tecnologías, aunado a la implementación de una amplia campaña de difusión sobre el voto electrónico. Además, el sistema debe ser compatible para personas con discapacidades físicas o parlantes de lenguas originarias.
- b) **Secrecía.** Debe evitar conexiones entre la identidad del votante y el voto emitido.
- c) **Integridad.** El sistema no debe poder cambiar el sentido de la votación ni el de los resultados, además de ser lo suficientemente seguro para evitar ataques. Debe ser auditable en todos sus componentes, sin romper con la secrecía del voto.
- d) **Igualdad.** Debe evitar la producción de sesgos que favorezcan o perjudiquen a alguna opción política en particular.

Si se lograran cubrir estos requerimientos, podríamos decir que el voto electrónico sería la solución frente a un escenario en el cual se tenga que evitar en lo posible la movilización de una cantidad grande de personas al mismo tiempo y hacia los mismos lugares, sin embargo, por más que se planeen auditorías ante y post de la utilización de la tecnología, buscando ganar la confianza de los actores políticos participantes y de la población, generando además un sistema de alta seguridad, es imposible que el programa mantenga intacta la secrecía del voto, ya que al implementar un procedimiento de verificación exhaustivo se vulneraría necesariamente ese principio, como se explica en el análisis del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas⁵ realizado a petición del Ministerio del Interior argentino, como parte del foro de discusión en aquel país para la implementación de tecnología en las diversas etapas del proceso electoral, al señalar que existe una dificultad técnica para mantener el secreto, lo que implica que un voto no puede ser asociado a su emisor, lo que imposibilita explicar con posterioridad si un voto fue emitido válidamente por un elector o es consecuencia de un mal funcionamiento del software (Jacobs & Pieters, 2009)⁶. Esta limitación se debe a una demostración teórica de que tres características requeridas en el diseño del sistema para proteger los atributos del voto, como son la integridad, auditabilidad y la

⁵ En adelante CONICET.

⁶ Citados en el análisis del CONICET.

secrecía son mutuamente excluyentes entre sí, por lo que no se pueden satisfacer completamente de manera simultánea (Hosp & Vora, 2008)⁷.

Por otro lado, la implementación de tecnología a la recepción de la votación y el cómputo de la misma, relegaría la función de los partidos políticos y las candidaturas como fiscalizadores de la elección, ya que como se señaló anteriormente, el voto electrónico exigiría la contratación de fiscales informáticos o la capacitación en dicha rama a los ya existentes en los cuadros de los institutos políticos, de tal forma que puedan tener los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento de las máquinas y así controlar que se desarrollen unos comicios libres de errores, manipulaciones y fraudes, en respeto a los principios rectores de la materia.

Esta exigencia, además de implicar un requisito adicional para los actores del proceso, fue declarada inconstitucional en Alemania por el Tribunal Constitucional Federal Alemán en el año dos mil nueve, bajo el argumento de que se privaba a la ciudadanía en general de poder observar, controlar, supervisar y fiscalizar las elecciones en las cuales se designan los poderes públicos bajo la voluntad popular de las comunidades, concluyendo que el voto electrónico violentaba el principio de transparencia electoral.

Los argumentos más importantes del fallo se encaminaron en resaltar que la publicidad de una elección es una condición fundamental para la formación democrática de la voluntad pública, lo que genera comprensión de los procesos electorales y en consecuencia condiciones para la confianza ciudadana (párrafo 106). Solamente si existe la posibilidad de vigilar que la elección se conduzca bajo los principios constitucionales, se tendrá como resultado una delegación del poder legítima en la representación popular (párrafo 108). Esta vigilancia y control debe ser tarea de cada ciudadano y ciudadana, por lo que debe evitarse imponerles cargas que impliquen el poseer conocimientos técnicos especiales (párrafo 109). Solamente si el pueblo puede convencerse por sí mismo de la legalidad del proceso electoral, se garantizará la confianza en la ocupación de los cargos de elección popular (párrafo 109). El principio de máxima publicidad de la elección, implica que cada uno de sus pasos se pueda revisar públicamente, especialmente las etapas de la determinación de los resultados electorales, de ahí la relevancia de los procedimientos de control

⁷ Citados en el análisis del CONICET.

y fiscalización (párrafo 111). Por lo anterior, un proceso electoral que implique la introducción de elementos tecnológicos que impidan que la ciudadanía verifique si sus votos fueron debidamente contados, así como la determinación de los resultados, excluyendo por ende el control público de la elección, se aleja de los principios constitucionales (párrafo 112). Por último, señaló la sentencia que al emplear tecnología en la elección, deben poder emplearse medios de control ciudadano sin que se exijan conocimientos técnicos especiales para ello, concluyendo que los aparatos electrónicos para votar no cumplían con las características señaladas, además evidenció el riesgo de que la falla en el software de una máquina de este tipo podría traer como consecuencia un efecto multiplicador en los demás aparatos instalados, ocasionando un daño determinante en la elección de condiciones irreparables, a diferencia de las votaciones tradicionales, donde además de ser más sencillo identificar una manipulación o falsificación su efecto es individualizado, situación que con menos esfuerzo ocasionaría mayor impacto en el marco de un sistema informático (párrafo 118). La y él elector deben tener la seguridad de que su voto será contabilizado, no puede exigírsele confianza sin que se le permita verificar por sí mismo la integridad del sistema (párrafos 119 y 120). De implementarse un sistema tipo voto electrónico debe asegurarse que este permite a las y los ciudadanos verificar fiablemente su funcionamiento, sin la exigencia de contar con conocimientos previos técnicos especializados (párrafo 122). Lo anterior no puede sustituirse con la implementación de un tercero intermediario, como podría ser una empresa contratada especializada, deben ser los y las ciudadanas por si mismas quienes verifiquen la integridad técnica del sistema implementado (párrafo 123). Finalmente concluyó, que el objetivo de allegarse rápidamente de los resultados electorales o de sintetizar el procedimiento de votación no es un interés constitucional suficiente para limitar la publicidad de la elección o la transparencia electoral (párrafo 130).⁸

Con esto podemos determinar que el uso de tecnología en las elecciones, si bien puede ser una solución para salvaguardar el derecho a la salud en el contexto de la declaración de la existencia de una pandemia o contingencia sanitaria, no logra del todo proteger los derechos que también poseen las personas respecto al ejercicio del voto activo, respetando todos sus atributos, como el de la secrecía, así como la atribución de vigilar el correcto desarrollo de los comicios, sin ninguna

⁸ Traducción del fallo a cargo de Manfredo Koessl y José M. Pérez Corti.

exigencia desproporcionada, lo que conlleva a la posibilidad de efectuar elecciones de mala calidad, y a la pérdida de la confianza y la legitimidad sobre estas.

V. Conclusiones.

En esta ponencia señalé la importancia que tienen los elementos del control y fiscalización de los procesos electorales, como promotores de la realización de elecciones integrales, libres y justas. De ahí la relevancia en que participen todos los actores y sectores en el ejercicio de estos elementos de fiscalización, como los partidos políticos, la ciudadanía, las candidaturas, los medios de comunicación, las organizaciones civiles, nacionales e internacionales, etc. Hice hincapié en que estos mecanismos de control se basan principalmente en la observación presencial y el conocimiento electoral.

Posteriormente describí el contexto de sanidad en el que vivimos actualmente prácticamente en todo el mundo, enfocándome al caso mexicano, señalando las distintas acciones emprendidas por el gobierno federal para tratar de contrarrestar la pandemia declarada por la OMS, concluyendo que todas ellas coincidían en la prohibición de realizar actividades que implicarán la conglomeración de personas en el mismo tiempo y espacio, estableciendo un listado de actividades esenciales que constituirían la excepción de ser suspendidas de manera temporal, en las cuales no se encontraba la función electoral, de ahí que incluso fueran cesados dos procesos electorales locales que se encontraban en marcha, los cuales además pudieron haberse encaminado hacia un posible estado de ingobernabilidad, pues es claro que los cargos públicos a renovarse no podrían ser alargados, por lo que se corrió el riesgo de que se produjeran vacantes en puestos de suma importancia para el funcionamiento político de esas entidades federativas⁹; lo anterior me llevó a abordar que el uso de la tecnología en las elecciones podría ser una solución para llevarlas a cabo salvaguardando el derecho a la salud de las comunidades, señalando algunas de sus ventajas, sin embargo, expuse que los principales problemas de su implementación radican en la imposibilidad de proteger los atributos del voto, particularmente el de la secrecía, aunado a que además, esta

⁹ Afortunadamente a la fecha de elaboración de esta ponencia dichas elecciones ya fueron reanudadas y reprogramadas sus respectivas jornadas de votación, lo que puede consultarse en la siguiente nota de prensa: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-reanuda-procesos-electorales-en-hidalgo-y-coahuila-elecciones-seran-en-octubre>

tecnología desplaza la función básica de la ciudadanía de observar, controlar y fiscalizar los comicios, exigiéndoles de manera desproporcionada la obtención de un conocimiento técnico especializado en programas informáticos para poder llevar a cabo esa función, lo que sin duda violenta el principio de transparencia electoral. De ahí que surge la necesidad de cuestionarnos si el derecho a la salud debe priorizarse por encima del derecho al voto activo, ejercido con todos sus atributos, así como para limitar la publicidad del proceso electoral.

La respuesta en mi consideración es que ambos derechos son igual de importantes, siendo una obligación de las autoridades electorales y sanitarias hacerlos convivir durante los próximos comicios en los siguientes meses o años; con motivo de la pandemia han sido pospuestas treinta y cuatro elecciones en el mundo de las cuales más de la mitad aún no tienen fecha para su reanudación, ello implica que los diseños de gobernanza electoral en el mundo tengan que evolucionar, pero no a costa de la vulneración de ciertos principios que paradójicamente son los que definen a un sistema electoral como democrático, es decir, no se trata de volver a simular que las personas votan y eligen a sus representantes, sino de mutar hacia mecanismos en los cuales la inversión no se enfoque en la implementación del voto electrónico con las limitaciones que ya describimos, sino en el equipamiento en materia de salubridad a las personas y los espacios donde se desarrollará la votación, así como en campañas de capacitación para quienes desempeñarán las funciones electorales con nuevas y más estrictas medidas de higiene, así como para la ciudadanía en general donde se les sensibilice y concientice respecto a la importancia de no dar pasos atrás en los logros que se han conseguido en materia de consolidación democrática, en convencerles de que ir a votar en esta nueva normalidad es seguro y necesario, e incluso importante, porque de nada sirve enfocarnos solamente al derecho a la salud sino se procura que el ejercicio de la renovación del poder público se lleve a cabo a conciencia y de la manera más democrática, puesto que de esto depende que podamos tener gobiernos capaces de tomar las mejores decisiones en un contexto de contingencia sanitaria, en favor de sus gobernados y gobernadas.

Corea del Sur es uno de los países que ha dado ejemplo de lo anterior, ya que celebró sus elecciones en medio de la pandemia, pero blindándolas con una inversión en termómetros y sanitización en las casillas, gel antibacterial y otros materiales¹⁰.

Por su parte, el ejemplo latinoamericano es la República Dominicana, el primer país en celebrar elecciones en medio de la contingencia sanitaria de esa zona, quien paradójicamente transitó de una triste experiencia de sus comicios municipales anteriores, por la mala implementación del voto automatizado¹¹, cuyo resultado fue una catastrófica jornada de votación que tuvo que ser suspendida por la autoridad electoral tan solo cuatro horas después de haber sido puesta en marcha, ante la generalización de fallos técnicos en los municipios donde fue usada dicha tecnología. El error provocó que no aparecieran todos los partidos o candidaturas en la pantalla de las máquinas de votación, es decir, produjo sesgos en la oferta electoral. La crisis ocasionada, trajo como consecuencia la acusación cruzada de los contendientes en complicidad con la autoridad electoral, señalando sabotaje y manipulación de las máquinas de sufragio. La elección tuvo que reprogramarse determinando regresar al mecanismo de votación con boletas de papel, consumando con ello un despilfarro de recursos por la obtención de las cincuenta y cinco mil máquinas ahora obsoletas, costeadas en diecinueve millones de dólares aproximadamente.¹²

Una misión de observación electoral a cargo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó una auditoría integral al sistema implementado con posterioridad a la elección, concluyendo en su informe que fueron cometidos quince fallos por parte de la Junta Central Electoral en la implementación del voto electrónico, los cuales por obviedad de extensión no detallo en este documento¹³, destacando únicamente que el organismo descartó la existencia de un ataque externo o intento de fraude, determinando por ende, que las fallas fueron internas y de carácter técnico, consecuencia de la falta de planeación, pero sobre todo de su debida discusión previa en cuanto a la implementación, delatando la cantidad de audiencias que por falta de consenso fueron abortadas.

¹⁰ Según nota de prensa consultables en el enlace electrónico: <https://elpais.com/internacional/2020-04-15/corea-del-sur-celebra-elecciones-y-afianza-su-imagen-de-buena-gestion-de-la-crisis-del-coronavirus.html>

¹¹ Así le conocen al voto electrónico en ese país.

¹² Véase la nota de prensa: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51538401>

¹³ Los fallos descritos por la OEA son consultables de manera íntegra en esta nota de prensa: <https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/los-15-fallos-que-cometio-la-jce-en-el-voto-automatizado-en-elecciones-de-febrero-segun-la-oea-HO18256450>

Sin embargo, en esta última elección llevada a cabo mediante la implementación del voto tradicional en papel, han reportado una jornada sin complicaciones y con una participación aceptable a pesar de la contingencia sanitaria que aún se vive y que había cobrado a la fecha de la elección en ese país casi ochocientos muertos y más de treinta y cinco mil contagiados.¹⁴

Fuentes consultadas:

Libros y/o artículos:

- BARRIENTOS DEL MONTE, Fernando. 2010. “Confianza en las Elecciones y el Rol de los Organismos Electorales en América Latina” en Revista Derecho Electoral, No. 10, pp.135.
- CONICET (2017). “Análisis de factibilidad en la implementación de tecnología en diferentes aspectos y etapas del proceso electoral”. CONICET, Buenos Aires. Consultable en: https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Analisis_factibilidad_implementacion_tecnologia_proceso_electoral.pdf
- GONCALVES FIGUEIREDO, Hernán (2013). “Manual de Derecho Electoral. Principios y Reglas. Teoría y práctica del régimen electoral y los partidos políticos.” Di Lalla, Buenos Aires.
- IDEA, (2006). “Diseño de administraciones electorales. Avance del Manual de IDEA Internacional”. Estocolmo: IDEA Internacional.
- MURAYAMA RENDÓN, Ciro (2017) “Fiscalización de Elecciones”, en Diccionario Electoral. Tomo I. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Tercera Edición IIDH. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, pp. 423-427.
- TULA, María Inés (2013). “Democracia, elecciones y nuevas tecnologías. El voto electrónico” Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, REMAP. Vol. 1 Nro. 2, Julio-Diciembre. Universidad de Guanajuato, División de Política y Gobierno, pp. 9-21.
- Nota de prensa, Pérez Corti, José <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-308014-2016-08-29.html>

¹⁴ Algunos datos de la elección dominicana fueron obtenidos del enlace: <https://www.dw.com/es/rep%C3%BAblica-dominicana-celebra-elecciones-bajo-pandemia/a-54061571>